

Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos

Reporte No. 167 Comité PPD e Independientes Enero 2026
--

Venezuela en la mira de Washington

Desde comienzos del siglo XXI, Venezuela pasó de ser un socio petrolero relativamente estable de Estados Unidos a convertirse en uno de sus principales adversarios políticos en América Latina, giro que se acentuó con la llegada de Hugo Chávez, la radicalización del proyecto bolivariano y la progresiva ruptura de la cooperación militar y antidrogas, hasta desembocar en una relación dominada por sanciones, amenazas de cambio de régimen y, recientemente, por una intervención militar abierta a ojos de todo el mundo.

Esta intervención no constituye un episodio aislado, sino que forma parte de una amplia estrategia de reafirmación de la primacía de Estados Unidos en el hemisferio occidental, vinculada a la seguridad energética, el combate al crimen organizado y la proyección de poder frente a rivales globales.

De socios a enemigos: evolución histórica

Durante buena parte del siglo XX, la relación entre Washington y Caracas se apoyó en una alianza petrolera y militar relativamente estrecha, gracias a la cual Estados Unidos contribuyó a profesionalizar las fuerzas armadas venezolanas y veía al país como un pilar de estabilidad regional y proveedor seguro de crudo.

La llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999 marca un punto de inflexión en esta relación ya que se cuestiona la presencia militar estadounidense, se expulsa a asesores y a la DEA, y se reorienta la política exterior hacia alianzas con Cuba, Rusia, Irán y China. Episodios como la rápida aceptación estadounidense del efímero gobierno golpista de Pedro Carmona en 2002 alimentan la percepción de una injerencia directa de Washington, consolidando una narrativa de confrontación permanente.

Tras la muerte de Chávez, el gobierno de Nicolás Maduro heredó tanto el discurso antiestadounidense como una economía cada vez más deteriorada, lo que intensificó las tensiones con Washington y abrió la puerta a un uso masivo de sanciones como herramienta privilegiada de presión.

El régimen de sanciones: presión económica y aislamiento político

Aunque ya bajo Barack Obama se adoptaron sanciones selectivas contra funcionarios venezolanos vinculados a violaciones de derechos humanos, es con la administración Trump que se implementa un amplio régimen de sanciones financieras,

petroleras y personales. En 2015, la Orden Ejecutiva 13692 declara a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos, abriendo la vía legal para congelar activos y restringir visados. A partir de 2017, Washington prohíbe el acceso de Caracas a los mercados financieros estadounidenses, sanciona a altos cargos del gobierno y, en 2019, impone sanciones devastadoras contra la petrolera estatal PDVSA, bloqueando sus activos en Estados Unidos y restringiendo pagos por exportaciones de crudo. Todas estas medidas buscan forzar la salida de Maduro, debilitar la capacidad de financiación del Estado y apoyar a la oposición venezolana que reclama la ilegitimidad de los procesos electorales.

Sin embargo, las sanciones tienen severos efectos colaterales sobre la población, ya que contribuyen a agravar la crisis económica, las carencias de alimentos y medicinas, acelerando un proceso de emigración masiva que, por otro lado, no logra un cambio de régimen. Pese a ajustes tácticos posteriores, como flexibilizaciones puntuales bajo otras administraciones, la lógica central de presión económica se mantiene y sirve de telón de fondo para las escaladas más recientes.

De la “guerra contra las drogas” a la intervención armada

En los años recientes, la estrategia estadounidense incorporó con mayor fuerza el discurso de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado para justificar una postura más agresiva hacia Venezuela, con Washington acusando a miembros de la cúpula venezolana de integrar el llamado “Cartel de los Soles” y calificando a organizaciones criminales como el Tren de Aragua de amenazas transnacionales, incluyéndolas en las listas de organizaciones terroristas extranjeras.

En 2025, el gobierno de Trump firmó una norma secreta autorizando el uso de la fuerza militar contra determinados carteles latinoamericanos, y simultáneamente duplicó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, presentándolo como un líder de “narco-terrorismo”. Esta narrativa permitió reposicionar la confrontación con Venezuela en el marco de un conflicto político y también como asunto de seguridad interna estadounidense, conectando drogas, migración y crimen organizado.

El clímax se produjo el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses lanzaron un operativo en Caracas en la que capturaron a Maduro y su esposa, en una acción presentada como aplicación extraterritorial de leyes estadounidenses contra el narcotráfico. La Casa Blanca sostiene que el objetivo es estabilizar el país, garantizar elecciones futuras y asegurar que las enormes reservas petroleras venezolanas sean desarrolladas por empresas estadounidenses, articulando así seguridad, economía y geopolítica en un mismo movimiento.

La dimensión jurídica: excepcionalismo y choque con el derecho internacional

La intervención militar estadounidense en Caracas plantea un serio conflicto con el derecho internacional, en particular con la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros Estados salvo en legítima defensa o mandato expreso del Consejo de Seguridad.

Al actuar sin autorización de la ONU y sin ataque armado previo por parte de Venezuela contra Estados Unidos, la operación se sitúa jurídicamente en una zona de clara ilegalidad desde la perspectiva del derecho internacional público.

Para justificar sus acciones, Washington recurre a una interpretación expansiva de su propia legislación interna, presentando la captura de Maduro como el cumplimiento de órdenes de tribunales y leyes federales vinculadas al narcotráfico y al terrorismo, en una práctica que refuerza un patrón de excepcionalismo en el que se presupone que la ley estadounidense puede proyectarse por encima de las normas internacionales, mientras que las posibilidades de sanción efectiva son mínimas dado el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad.

El resultado es una tensión manifiesta en la que ciertos actores regionales ven la intervención como la respuesta legítima a un régimen autoritario acusado de graves violaciones de derechos humanos, mientras que otros la interpretan como una violación flagrante de la soberanía venezolana y un precedente peligroso para la región.

Recursos energéticos, migración y cálculo geopolítico

Más allá de los argumentos jurídicos y de seguridad, la intervención de Estados Unidos en Venezuela tiene un fuerte componente económico y geopolítico vinculado al petróleo y al gas, ya que el país posee algunas de las mayores reservas de crudo del mundo, y la administración Trump ha explicitado su intención de que empresas estadounidenses participen en su explotación, presentándolo incluso como una forma de “recuperar” recursos supuestamente mal gestionados por el chavismo.

Al mismo tiempo, la crisis venezolana ha generado una de las mayores oleadas migratorias recientes en América Latina, con millones de personas desplazadas hacia países vecinos y, en menor medida, hacia Estados Unidos. Como parte de su narrativa, Washington vincula esta migración con sus propios debates internos sobre seguridad fronteriza, argumentando que estabilizar Venezuela y combatir el crimen organizado contribuiría a frenar los flujos migratorios irregulares hacia su territorio.

En el plano global, la ofensiva sobre Venezuela busca también limitar la penetración de actores como Rusia, China e Irán en el Caribe y en el control de recursos estratégicos. Al frenar acuerdos petroleros con estas potencias y retomar influencia sobre PDVSA (la petrolera venezolana) y el sector energético, Estados Unidos envía una señal de que el hemisferio occidental sigue siendo un espacio de influencia privilegiada, retomando de facto la lógica de que ninguna potencia extrahemisférica debe desplazarlo en su “patio trasero”.

Impactos internos y regionales

En territorio venezolano la intervención estadounidense crea un escenario de enorme incertidumbre pues la captura de Maduro no implica de inmediato la consolidación de un nuevo orden político, y actores internos —desde sectores del chavismo hasta la oposición y grupos armados— compiten por capitalizar el vacío de

poder. La realidad es que la presencia indirecta de Estados Unidos, apoyando una transición y buscando socios confiables, alimenta tanto expectativas de reconstrucción económica como temores a una tutela externa prolongada.

Mientras tanto, en la región, la operación agudiza las divisiones entre algunos gobiernos alineados con Washington que respaldan la acción en nombre de la restauración democrática, y otros que la condenan como un acto de intervencionismo violatorio de la soberanía hemisférica. Organismos regionales y foros como la OEA, CELAC y la ONU enfrentan el desafío de responder a un hecho consumado, en un contexto de creciente polarización geopolítica global.

Pero esta intervención no solo afecta directamente a Venezuela, también envía un poderoso mensaje a otros gobiernos latinoamericanos: Estados Unidos está dispuesto a combinar sanciones, presión judicial y uso selectivo de la fuerza cuando considera que se cruzan ciertas “líneas rojas” en materia de narcotráfico, migración o alineamientos estratégicos. La señal tiene un efecto disuasorio, pero también puede estimular la búsqueda de contrapesos en alianzas con potencias extrahemisféricas, acelerando la multipolaridad conflictiva en la región más violenta del mundo.

Venezuela se convierte así en un laboratorio donde se ensaya una combinación de instrumentos económicos, jurídicos y militares que podría replicarse en otros escenarios, con implicaciones profundas para la paz regional y la arquitectura del sistema internacional. El desenlace de este proceso —si deriva en una transición relativamente ordenada o en una prolongada fragmentación violenta— será clave para evaluar si la intervención estadounidense logra sus objetivos declarados o termina confirmando, una vez más, los límites y riesgos del intervencionismo como herramienta de política exterior. La reflexión que queda pendiente es el nivel de relativización global con el que se analizan hoy los conflictos mundiales y la forma en que responden a ellos, tanto las naciones como los cuerpos internacionales que tienen un mandato para mantener los equilibrios.

UE-MERCOSUR, 25 años de tensiones con Francia en el epicentro

Reporte No. 168 Comité PPD e Independientes Enero 2026
--

Tras un cuarto de siglo de idas y venidas, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) recibió el visto bueno del Consejo de la UE el pasado 9 de enero, a pesar del rotundo “no” de Francia. París, que pasó de apoyar el pacto en 2019 a liderar la oposición por motivos ambientales y agrícolas, quedó aislada en un pulso que no hace más que revelar las fisuras de la política comercial europea.

La trayectoria

Todo se inicia en 1995 con un acuerdo marco de cooperación UE-MERCOSUR, que sienta las bases para un ambicioso pacto de libre comercio inter-regional cuyas asociaciones comienzan en 1999 con la UE aspirando a derribar aranceles sudamericanos en industrias y agroalimentos, mientras que el bloque sureño defiende su agricultura sensible. Brasil y Argentina imponen barreras del 35% en autos y lácteos, por lo que las conversaciones se congelan en 2004 sin avances concretos. Aunque durante esta etapa, Francia apoya la vía multilateral de Bruselas, ya se encienden las primeras alarmas del sector agropecuario que acusan una competencia “injusta” desde el Cono Sur.

Las rondas se reanudan durante 2010 y luego de dos años se congelan hasta llegar al 2016, impulsadas por el auge proteccionista global bajo el primer mandato de Donald Trump en EE.UU. La UE ve en el MERCOSUR una tabla de salvación para materias primas clave: soja, carne, minerales. De estas conversaciones surge un equilibrio que permite la eliminación del 91% de aranceles MERCOSUR sobre bienes europeos y 92% en el sentido opuesto, además de la incorporación de capítulos sobre sostenibilidad y derechos humanos para calmar a los críticos.

Francia se mantiene cauta, mientras la FNSE, el principal sindicato agrario del país, advierte de los riesgos para la ganadería vacuna ante las cuotas de 99.000 toneladas de carne argentina con aranceles reducidos, que podrían golpear fuertemente los ingresos rurales.

El día de la verdad

El punto de inflexión llega el 28 de junio de 2019, durante el G20 en Osaka, en el que Jean-Claude Juncker y los líderes del MERCOSUR anuncian un “acuerdo histórico” de principio, que Bruselas celebra como un impulso de 4.000 millones de euros en exportaciones agroalimentarias europeas. Sin embargo, apenas dos meses después, el

23 de agosto en el G7 de Biarritz, Emmanuel Macron retira el apoyo francés ante los devastadores incendios en la Amazonia bajo el mandato de Jair Bolsonaro, exigiendo “garantías ambientales blindadas” y “cláusulas espejo” para equiparar normas sanitarias y sociales entre ambas orillas del Atlántico.

El efecto dominó de esta medida es inmediato y en octubre de 2020, el Parlamento Europeo rechaza el texto con Alemania, liderada por Angela Merkel, uniéndose al bloqueo. De esta forma, Francia toma las riendas de una coalición escéptica –junto a Irlanda y Países Bajos–, paralizando por completo la ratificación.

Lejos de rendirse, las conversaciones reviven en 2023 cuando la UE presenta una oferta en marzo, que el MERCOSUR responde en septiembre, para cerrar diciembre de 2024 con un borrador revisado que incorpora salvaguardas clave, como cláusulas contra la deforestación y un fondo de 1.000 millones de euros para agricultores europeos. Macron, quien califica el borrador de “inaceptable” durante la COP28, presiona por auditorías independientes sobre los estándares sudamericanos; mientras que las elecciones europeas fortalecen a eurodiputados franceses anti-MERCOSUR, como los de RN y LFI.

Aun así, la Comisión von der Leyen camina aceleradamente hacia la legalización a finales de 2025, con Francia intentando, sin éxito, formar una minoría de bloqueo. El punto álgido explota en enero de 2026 cuando los embajadores de la UE aprueban el acuerdo por mayoría calificada, ignorando el voto en contra de Francia. Ursula von der Leyen lo firma el 12 y la aplicación provisional del pilar comercial depende ahora de un plenario inminente en el Parlamento Europeo.

En Francia, la reacción genera un terremoto con protestas agrarias masivas, mientras LFI y RN presentan dos mociones de censura contra el gobierno Lecornu –rechazadas el 14 de enero–. Todos los partidos, desde LFI hasta LR, denuncian una “traición”: Brasil permite pesticidas prohibidos en Europa y deforesta para soja y carne.

Macron, debilitado por la inestabilidad post-disolución, cede ante la realidad: la política comercial es competencia exclusiva de la UE en un episodio que desnuda los límites del poder nacional en el comercio de la UE, donde los acuerdos validados por la mayoría calificada siempre prevalecen. En un mundo multipolar, el dilema es claro: ¿priorizar la apertura comercial o defender la soberanía alimentaria y verde?

Francia en Cifras

Desde el ángulo económico, el pacto es una bendición para la industria francesa aeroespacial, del lujo y las farmacéuticas que podrían crecer un 20% en exportaciones–, pero un mazazo para el agro, ya que según los críticos podría haber hasta 70.000 empleos en riesgo.

El intercambio Francia-MERCOSUR ya ronda los 16.000 millones de euros anuales. Las cifras clave del sector agropecuario francés y su impacto proyectado por el acuerdo UE-MERCOSUR provienen de estudios oficiales de la Comisión Europea,

sindicatos agrarios y análisis independientes. Francia, primer productor agrícola de la UE, con el 18% de la producción bruta europea, genera 70-75 mil millones de euros anuales en valor agregado, pero ya arrastra un déficit comercial agroalimentario de 10-15 mil millones de euros en 2025.

Francia cuenta con unos 400.000 explotaciones agrícolas (50% menos que hace 30 años) y emplea directamente 880.000 personas (caída del 50% desde 1990 por la PAC, Política Agrícola Común). Representa el 1,6% del PIB nacional y el 43% del mercado agroexportador europeo, pero ha bajado del 2º al 6º puesto mundial en exportaciones. Los sectores clave son la carne bovina (4,7 millones de toneladas/año), aves (5 millones de toneladas), lácteos (25 millones de toneladas de leche) y cereales (para piensos). Importa ya el 50% de frutas/verduras consumidas.

En materia de empleos se calcula una pérdida neta de empleos en el sector agrícola de entre 10.000-20.000 directos (ganadería, mataderos); hasta 70.000 indirectos (rurales, según críticos como Coordination Rurale). En contrapartida se generarían entre +80.000-120.000 en industria/servicios (exportaciones lujo, aéreo).

Cuotas de importación adicionales por MERCOSUR

El acuerdo permite volúmenes extra con aranceles reducidos (0-20% progresivos):

- Carne bovina: +99.000 toneladas/año (total UE: 99.000 t; Francia recibe ~20-25%, o 20.000-25.000 t).
- Aves de corral: +180.000 toneladas/año (+55% sobre importaciones actuales del MERCOSUR).
- Azúcar: +190.000 toneladas (crudo/refinado).
- Etanol: +600.000 toneladas.

Sector afectado	Producción Francia (anual)	Import extra MERCOSUR	Impacto proyectado
Carne bovina	4,7 millones t	+20-25.000 t	-0,3-0,5% ingresos productores; 5.000-10.000 empleos en riesgo (cierres mataderos/explotaciones).
Aves	5 millones t	+30-40.000 t (parte Francia)	Pérdida mercado piensos (cereales); +10.000 empleos indirectos amenazados.
Azúcar/Miel	4,5 millones t azúcar	+190.000 t azúcar	Fragilización rural; miles de empleos en refinería/veterinaria.

Sector afectado	Producción Francia (anual)	Import extra MERCOSUR	Impacto proyectado
Lácteos (ganancia neta)	25 millones t leche	Cuotas export UE: +30.000 t queso	Compensación parcial (+10-15% exports vinos/lácteos).

Link sugerido

<https://www.bbc.com/mundo/articles/cwyrqenr72ro>

Situación mundial: CRISIS

Reporte No. 169
Comité PPD e Independientes
Enero 2026

La situación internacional a comienzos de 2026 muestra un sistema mundial que dejó atrás el espejismo del “orden liberal” para entrar en una fase de fragmentación y rivalidad entre grandes potencias, normalizando la fuerza como herramienta de política exterior. De ello dan clara cuenta las palabras de Mark Carney, primer ministro de Canadá, quien en su discurso pronunciado la semana pasada en Davos, señaló: "Permítanme ser directo: nos encontramos en medio de una ruptura, no de una transición", rechazando con ello la noción de que el sistema actual solo está "transicionando" hacia algo nuevo, e insistiendo en que las grandes potencias han roto las normas mediante coerción económica.

En este contexto, el segundo mandato de Donald Trump no es un factor menor, sino un verdadero multiplicador de tensiones alimentado por su estilo unilateral, transaccional y agresivo que reconfigura alianzas, desestabiliza instituciones multilaterales y vuelve más frágiles los equilibrios regionales, todo a la fuerza. La reciente disputa en torno a Groenlandia, convertida en objeto de deseo estratégico y “trofeo” simbólico, resume esta lógica: el Ártico ya no es ese lugar periférico, sino uno de los tableros centrales donde se cruzan seguridad, clima, rutas marítimas y competencia entre potencias.

El 2026 consolida un mundo donde la rivalidad sino-estadounidense convive con un resurgir de Rusia y con un sur global que reclama más voz frente a instituciones de posguerra hoy erosionadas, con riesgos asociados a la prolongación de la guerra en Ucrania, la inestabilidad en Oriente Medio, la militarización del Caribe y de América Latina, y el avance de la crisis climática sin respuestas coordinadas. La consecuencia es un aumento generalizado del gasto militar, del resguardo fronterizo y de las políticas de “friend-shoring”, es decir, la reubicación de cadenas de suministro y producción estratégica hacia países aliados políticamente, priorizando la seguridad geopolítica sobre el menor costo, especialmente en energía y minerales críticos.

En este escenario ya volátil, la política exterior de Trump profundiza la ruptura con la tradición multilateral estadounidense y actualiza, en clave siglo XXI, un nacionalismo que se mueve entre el neo-aislacionismo retórico (“Estados Unidos primero”) y los gestos de neo-imperio en regiones consideradas vitales para la seguridad nacional. El gobierno ha abandonado o debilitado múltiples instituciones y acuerdos internacionales —desde la Organización Mundial de la Salud y marcos climáticos hasta foros atlánticos de cooperación— subordinando el comercio a objetivos explícitos de seguridad y convirtiendo aranceles y acceso al mercado estadounidense en armas negociadoras. Esta combinación es altamente riesgosa ya que erosiona la normativa, desplaza el centro de gravedad de la diplomacia hacia la coerción económica y deja tanto

a socios como aliados en un estado de incertidumbre estratégica permanente. Y la incertidumbre, por cierto, tiene a todo el mundo paralizado.

Las consecuencias son visibles en varios frentes regionales. En Europa, la relación con Rusia y la guerra en Ucrania se gestionan bajo un liderazgo estadounidense cada vez más errático, donde Washington dice buscar un alto el fuego pero apunta, según expertos, a acuerdos bilaterales de inversión y seguridad que beneficien a Moscú y debiliten la cohesión occidental. El resultado es una OTAN tensionada en la que algunos aliados temen que la alianza se instrumentalice en función de los intereses tácticos de la Casa Blanca, mientras Rusia se acerca a su objetivo de dividir al bloque occidental y debilitando la capacidad disuasiva de la organización.

Al mismo tiempo, Europa se ve obligada a incrementar su gasto militar y a pensar en una autonomía estratégica que hasta ahora era más discurso que realidad, todo ello bajo la sombra de posibles tarifas estadounidenses si Bruselas no se pone en la fila. La amenaza comercial ataca de nuevo.

En Oriente Medio y sus periferias, la impronta de Trump se expresa a través de un respaldo casi incondicional a Israel, una retórica y práctica de confrontación con Irán y una disposición a intervenir militarmente que desborda los márgenes de la diplomacia clásica. La combinación de apoyo a operaciones militares, amenazas directas y debilidad de los marcos multilaterales para contener la escalada produce un entorno en el que la lógica del equilibrio de poder se impone sobre cualquier narrativa de paz o seguridad colectiva. Las repercusiones se sienten en los mercados energéticos, en las rutas de transporte y en nuevos ciclos migratorios, que a su vez alimentan políticas de cierre de fronteras y discursos xenófobos en Europa y Norteamérica.

América Latina y el Caribe, por su parte, reaparecen como el escenario de un intervencionismo sin tapujos, en el que el gobierno de Trump ha normalizado el despliegue de flotas navales, ataques puntuales y amenazas explícitas contra gobiernos percibidos como hostiles, con el argumento de combatir el narcotráfico, el terrorismo o la influencia de China y Rusia. Esta dinámica evoca una actualización de la Doctrina Monroe y afianza la percepción de la región como “patio trasero”, lo que debilita soberanías, polariza sociedades y desplaza la agenda social y democrática a un segundo plano frente a la lógica militar. La intervención en Venezuela, que abordamos en el reporte anterior, las presiones sobre México y Centroamérica y el uso de recompensas y sanciones selectivas contra líderes latinoamericanos son ejemplos de una política que combina castigo ejemplarizante con recompensa a aliados dóciles, lo que reconfigura los equilibrios internos y regionales.

En el plano global, la política climática y económica de Trump agrava el carácter de “crisis superpuesta” del momento actual, ya que la retirada o debilitamiento de marcos climáticos internacionales y la oposición a esfuerzos colectivos de mitigación dejan un vacío de liderazgo que China comienza a ocupar en el discurso y también en la práctica financiera y tecnológica. Al mismo tiempo, la explotación intensiva de combustibles fósiles y la apuesta por la reindustrialización bajo criterios puramente nacionales dificultan cualquier transición energética coordinada, pese a que se ha

demostrado que el impacto del cambio climático golpea con mayor fuerza a los países más pobres del sur global. En este sentido, la política de Washington convierte la crisis climática en un terreno de competencia estratégica, más que en un área de cooperación mínima imprescindible.

Groenlandia

Es en este marco donde la cuestión de Groenlandia adquiere un significado desproporcionado en relación con su tamaño demográfico, pero coherente con su peso geoestratégico. Groenlandia, territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, se ha vuelto crucial por tres razones: su posición en el Ártico y el Atlántico Norte, en la ruta de nuevos pasos marítimos liberados por el deshielo; la presencia de recursos y minerales críticos; y su papel en el sistema de defensa y vigilancia militar de Estados Unidos y la OTAN. La base de Thule y el acuerdo de defensa de 1951 ya otorgan a Washington amplios derechos militares, pero no soberanía territorial, algo que Trump se ha propuesto cambiar desde su primer mandato, cuando habló de “comprar” la isla casi como quien adquiere una propiedad.

Tras años de declaraciones polémicas, el conflicto ha escalado en los últimos meses con Trump reiterando públicamente que Estados Unidos “necesita” Groenlandia, e insistiendo en que la defensa de la isla —frente a Rusia o China— requiere no solo bases sino también control político del territorio. Las autoridades danesas y groenlandesas han rechazado repetidamente cualquier venta o cesión, insistiendo en que la soberanía no está en discusión; sin embargo, Washington ha respondido con amenazas de tarifas del 10% e incluso del 25% contra un grupo de países europeos que se oponían a sus aspiraciones, ligando la cuestión territorial a una guerra económica intraoccidental.

Este uso de la coerción económica contra aliados, sumado a la sugerencia de que “el uso del ejército siempre es una opción”, ha generado ansiedad en la OTAN y en la Unión Europea, donde se debate hasta qué punto se estaría dispuesto a defender a Dinamarca frente a un socio que, paradójicamente, es el principal garante de la seguridad europea.

El punto culminante hasta ahora se produjo en el Foro de Davos de 2026, el mismo donde Mark Carney desnudó la cruda realidad: "Las potencias medias deben actuar juntas, porque si no estás en la mesa, estás en el menú."

Allí también se dio el escenario para que Trump anunciara un “marco de futuro acuerdo” sobre Groenlandia tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Según lo que se conoce, el esquema preliminar contempla un aumento de los derechos estadounidenses sobre los minerales groenlandeses y la integración de la isla en el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome”, a cambio de que la Casa Blanca retire temporalmente sus amenazas arancelarias contra varios países europeos. Para Copenhague y Nuuk, el desafío es aceptar algún tipo de fórmula de cooperación reforzada sin ceder soberanía; para la OTAN, se trata de equilibrar las preocupaciones

de seguridad ártica con la defensa de la integridad territorial de un aliado, evitando una fractura que podría ser “la hora más oscura” de la alianza.

Especialistas en geopolítica del Ártico interpretan esta disputa en diálogo con la tradición del pensamiento estratégico. Desde la óptica del poder marítimo de Alfred Mahan, controlar Groenlandia significa garantizar rutas y nodos críticos del Atlántico Norte y del Ártico, con implicaciones directas sobre la capacidad de proyectar fuerza hacia Europa y Eurasia. Otros analistas destacan que la isla se ha convertido en un test de estrés para la política ártica de la UE y para el principio de que la integridad territorial de los Estados aliados no puede ser objeto de negociación bajo presión económica o militar, incluso cuando el presionante es Estados Unidos. Así, Groenlandia no sólo es un territorio, sino un espejo del tipo de orden internacional que se está consolidando: uno donde las “esferas de influencia” y las lógicas de trofeo territorial retornan al centro de la escena.

Desde una perspectiva más general, diversos centros de análisis coinciden en que la combinación entre la retórica y las decisiones de Trump y la crisis de las instituciones multilaterales incrementan el riesgo de errores de cálculo y de conflictos no deseados. Por ejemplo, para el Stimson Center la política estadounidense hacia Rusia, el clima y las alianzas está entre los riesgos sistémicos del año, ya que un país que, como Estados Unidos, debilita esfuerzos climáticos, favorece acuerdos bilaterales con Moscú y presiona a aliados por vía arancelaria, crea incentivos para que otras potencias empujen sus propias agendas revisionistas con los riesgos globales y locales que ello acarrea.

Analistas de asuntos globales hablan incluso de un giro “neo-imperial” en la segunda presidencia de Trump, generando las condiciones para que la situación geopolítica mundial transite indefectiblemente hacia mayor inestabilidad, polarización y militarización, un mundo en el que la fuerza y la coerción económica ganan terreno frente a la diplomacia cooperativa, y en la que las decisiones y declaraciones de Trump actúan como acelerador y amplificador tensionando alianzas, banalizando amenazas militares, instrumentalizando el comercio y convirtiendo territorios en objetos de puja, con lo que se reduce el espacio para soluciones negociadas y se normaliza un lenguaje bruto y crudo de poder.

El desafío es de qué manera las respuestas generadas que provengan del resto de los actores —europeos, asiáticos, latinoamericanos, del sur global—, permitirán articular salidas que se alejen de la sumisión y de la escalada, para que este momento histórico proponga una salida menos violenta.

Por su parte, en el mismo foro de Davos, Donald Trump anunció la “Junta por la paz”, que representa la culminación de su visión de una diplomacia alternativa al multilateralismo tradicional. Esta instancia presidida indefinidamente por Trump con veto total, se presenta como organismo para garantizar “paz duradera” comenzando por Gaza, pero con ambiciones globales (Ucrania, Irán). Formalmente respaldado por la ONU vía Resolución 2803, su estructura es inédita ya que está financiada por “asientos permanentes” de 1.000 millones USD por país y dirigida por asesores como Rubio, Kushner y Blair.

El organismo, que refleja la lógica transaccional típica de Trump, prioriza resultados inmediatos sobre normas multilaterales y tiene actualmente a 35 países en su lista, mientras que otros como Francia y Dinamarca rechazan participar por temor a que debilite a la ONU y consolide el control personal de Trump sobre la arquitectura de seguridad global.

¿Qué podría salir mal?

Tablero de conflictos globales.

Reporte No. 170 Comité PPD e Independientes Enero 2026
--

A inicios de 2026, el sistema internacional presenta un panorama de alta fragmentación, con más de 50 conflictos activos que involucran a superpotencias, potencias regionales y actores no estatales en una dinámica de guerras de proximidad, despliegues militares inéditos y colapso (¿parcial?) del multilateralismo. Guerras prolongadas como la de Ucrania y Gaza se entrelazan con focos emergentes en el Caribe y África, mientras la diplomacia transaccional de Donald Trump actúa como catalizador de tensiones, reconfigurando alianzas tradicionales como la OTAN y acelerando la multipolaridad competitiva.

Europa del Este: Ucrania, el eje de la OTAN-Rusia en su quinto año.

La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, se ha estancado en un frente de trincheras que abarca desde Crimea hasta Járkov, con Moscú controlando aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluyendo el Donbás y un corredor terrestre hacia el Mar Negro. El presidente Volodímir Zelensky enfrenta un agotamiento multifacético ya que ha debido hacer frente a un reclutamiento forzado que genera protestas internas en un marco de fatiga social y de corrupción endémica que erosiona la confianza pública. Rusia, por su parte, ha absorbido sanciones occidentales mediante alianzas económicas con China e India, recibiendo misiles norcoreanos y drones iraníes para sostener su esfuerzo bélico.

La OTAN, con Estados Unidos aportando el 60% de la ayuda letal, se encuentra en una encrucijada bajo el liderazgo de Mark Rutte. Trump ha reducido drásticamente los envíos de armamento avanzado y presiona cotidianamente por una "paz negociada" que congele las líneas actuales, generando acusaciones europeas de una alianza debilitada. Esta postura transaccional refleja la doctrina "America First" que busca priorizar recursos para focos hemisféricos como Venezuela sobre la posibilidad de un conflicto europeo percibido como interminable.

Oriente Medio: multifrentes israelí-iraníes bajo mediación trumpiana

En Gaza, un alto el fuego precario —vigilado por la controvertida "Junta de la Paz" impulsado por Trump en Davos— que mantiene una reconstrucción parcial tras la escalada de octubre de 2025, que resultó en más de 40.000 muertos y una hambruna generalizada, en una de las crisis humanitarias más agudas de estos tiempos.

Benjamin Netanyahu persigue una victoria total sobre Hamás, mientras Hezbolá en Líbano y los hutíes en Yemen sostienen hostilidades contra Israel, bloqueando rutas en el Mar Rojo. Irán, por su parte, sigue enriqueciendo uranio al 90% pese a ciberataques y ataques israelíes, expandiendo su red de milicias desde Siria hasta Irak, y desafiando

con ello el equilibrio regional. La intervención de Trump aquí es fundamental ya que su Junta de Paz ignora completamente el programa nuclear iraní, priorizando el apoyo incondicional a Israel y los aranceles contra proveedores chinos que abastecen a grupos proxy.

En Siria, el caos post-Assad agrava la inestabilidad, con Turquía y Rusia compitiendo por influencia y generando riesgos muy altos de una guerra regional que podría estallar si Teherán cruza la "línea roja" nuclear, con Trump autorizando ataques preventivos que involucran a aliados saudíes y emiratíes, extendiendo el conflicto a múltiples frentes.

Hemisferio Occidental: el Caribe-Venezuela como foco hemisférico de Trump

El desarrollo más alarmante de 2026 es la escalada en el Caribe, con la reactivación de la Cuarta Flota estadounidense, el despliegue de F-35 en Colombia y Panamá, y los portaaviones patrullando aguas venezolanas. Bajo el pretexto de combatir "narcoestados", EE.UU. en lo que fue catalogado como una operación quirúrgica, capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, dando una salida altamente cuestionada al foco más urgente de 2026, mientras anuncia un "gobierno transicional" y condiciona el levantamiento de sanciones a la entrega de 800K barriles/día de PDVSA para Chevron. Trump declara en sus redes "El hemisferio es nuestro", y pareciera que sí.

Asia-Pacífico y África: tensiones periféricas con efectos globales

En Asia, China intensifica bloqueos navales alrededor de Taiwán, declarando la reunificación como "misión histórica", mientras EE.UU. fortalece AUKUS+ con Australia, Japón y Filipinas, y acelera el friend-shoring de semiconductores a India y Vietnam, completando el cuadro las tensiones nucleares entre India-Pakistán en Cachemira y las pruebas de misiles norcoreanas, aliados de Rusia.

África acumula crisis humanitarias, siendo la más urgente la de Sudán que lleva a cuestras una guerra de dos años entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (financiadas por los Emiratos Arabes Unidos), y que arrastra 12 millones de desplazados. En tanto, en la República Democrática del Congo, el M23 respaldado por Ruanda controla Kivu, en una situación agravada por la participación de los yihadistas. La región del Sahel sufre golpes de Estado en Mali, Níger y Burkina Faso, con repliegues tanto de los franceses como de los estadounidenses.

Según ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) el tablero mundial revela a la fecha 56 conflictos activos en los que el uso de las guerras proxy y las herramientas económico-comerciales son armas de las superpotencias que quieren imponer con ellas un nuevo tipo de poder transaccional, a riesgo de generar un orden insostenible cuyas implicaciones (climáticas, cibernéticas, nucleares) amenazan seriamente con un estallido a escala global.

Link sugerido

2026

[https://acleddata.com/update/latin-america-and-caribbean-overview-january-](https://acleddata.com/update/latin-america-and-caribbean-overview-january-2026)